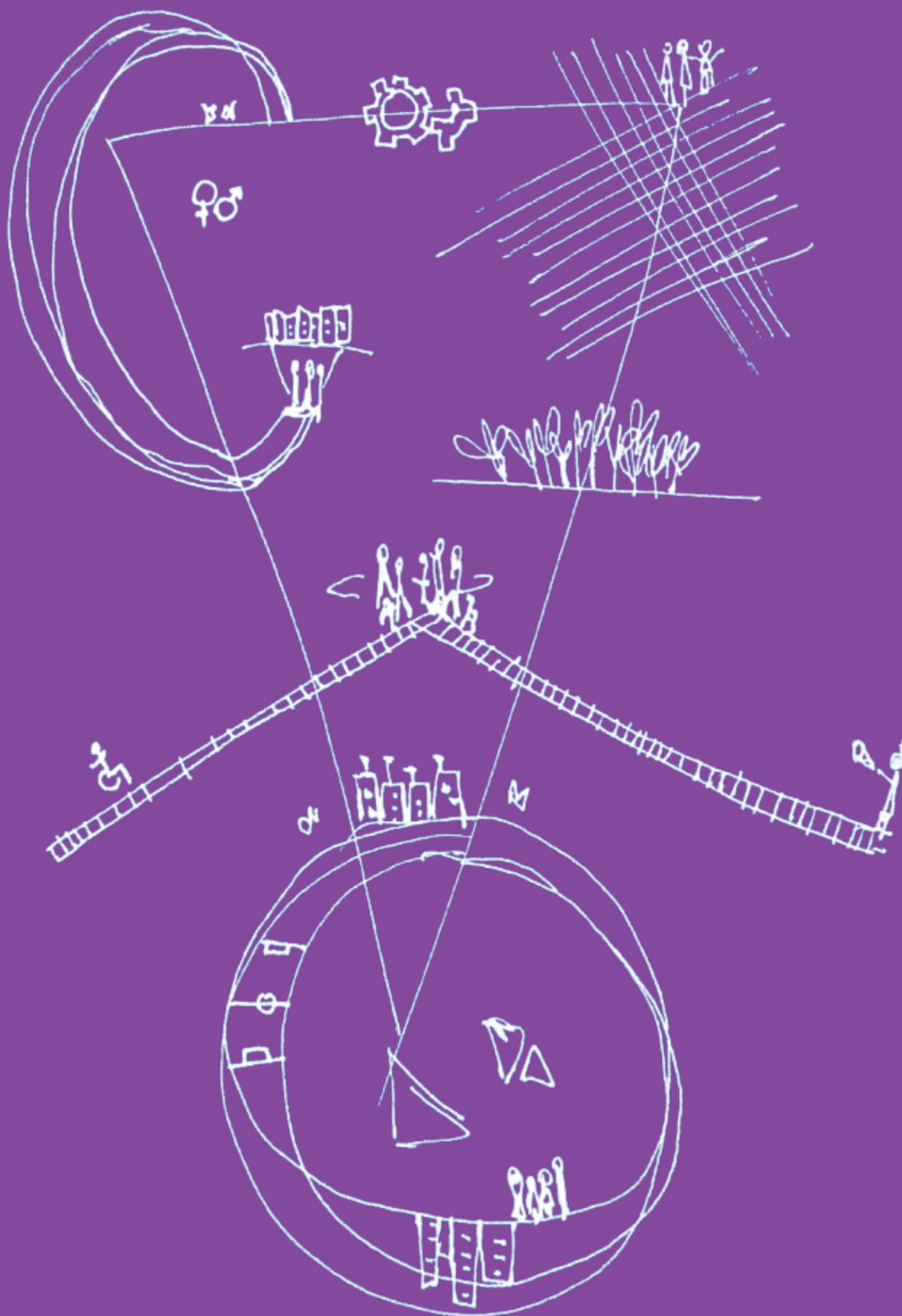


Seguridad alimentaria y organizaciones de la sociedad civil en tiempos de pandemia

Junio 2022



AUTORAS

Agustina Gradin
Adriana Rofman

Ilustración

Cortesía de María Florencia Marcos

Equipo de comunicación TEA

Mariela Godoy
Natalia Ponce

EDICIÓN

Equipo de comunicación TEA

Buenos Aires, marzo de 2022

Territorios en Acción es una iniciativa conjunta entre el Observatorio del Conurbano de la UNGS, el Programa de OSC de FLACSO Argentina y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de CONICET.

Esta publicación fue realizada con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Contacto

www.territoriosenaccion.org
Correo electrónico: territoriosenaccion@gmail.com

ISBN

Gradin, Agustina

Seguridad alimentaria y organizaciones de la sociedad civil en tiempos de pandemia / Agustina Gradin ; Adriana Rofman. - 1a ed ampliada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Flacso Argentina, 2022.

Libro digital, PDF/A

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-950-9379-98-5

1. Seguridad Alimentaria. 2. Organización Comunitaria. 3. Organización Gubernamental. I. Rofman, Adriana. II. Título.

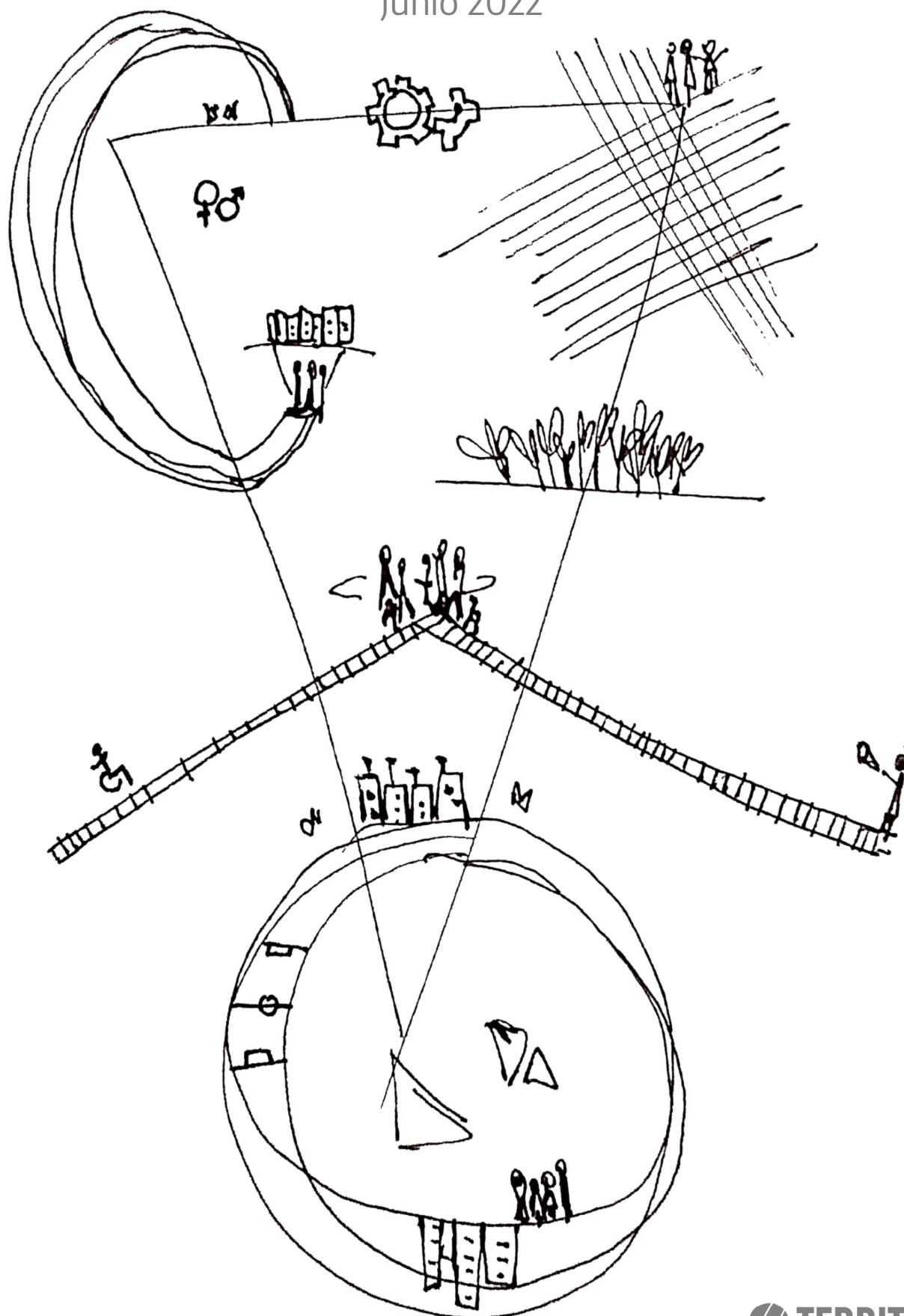
CDD 363.85

Este Documento de Trabajo y su contenido se brindan bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial 2.5 Argentina. Es posible copiar, comunicar y distribuir públicamente su contenido siempre que se cite a los autores individuales y el nombre de esta publicación, así como la institución editorial.

El contenido de este Documento de Trabajo no puede utilizarse con fines comerciales

Seguridad alimentaria y organizaciones de la sociedad civil en tiempos de pandemia

Junio 2022



Índice

Sobre las autoras	5
Resumen ejecutivo	6
I. Introducción	8
II. El papel de las organizaciones sociales de base territorial en la seguridad alimentaria.	9
III. Políticas públicas de asistencia alimentaria y organizaciones de la sociedad civil.	12
IV. Los resultados: organizaciones sociales en el campo de la seguridad alimentaria.	17
A. Distribución territorial	18
B. La acción habitual de las organizaciones dedicadas a la seguridad alimentaria.	19
C. Iniciativas frente a la pandemia	21
Alcance y cobertura de la iniciativa en pandemia	22
Relación con el (los) Estado(s)	23
D. Participación en redes	25
V. A modo de conclusión	26
VI. Bibliografía	28
Territorios en Acción	30

Sobre las autoras

Agustina Gradin

Politóloga, Dra. en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Programa de Estudios sobre Organizaciones de la sociedad civil FLACSO Argentina. Co- coordinadora de Territorios en Acción.

Adriana Rofman

Socióloga, Dra. en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesora e investigadora del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento. Co- coordinadora de Territorios en Acción

Resumen ejecutivo

Este informe analiza las acciones de las organizaciones sociales del campo de la asistencia alimentaria y sus vinculaciones con el Estado, así como la conformación de redes dentro de este campo, a partir de los datos generados por Territorios en Acción entre 2020 y 2021 durante la pandemia del Covid 19.

El recorrido por las políticas públicas alimentarias en Argentina ponen en evidencia que la cuestión está muy presente en la agenda gubernamental desde hace varias décadas, y que buena parte de dichas políticas han apelado a diseños participativos, que involucran a organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el entramado de gestión. La multiplicación de comedores comunitarios en este período da cuenta de esta tendencia.

Ello también se advierte en las respuestas obtenidas acerca de las acciones de las OSC frente al Covid19. El campo de la seguridad alimentaria constituye el ámbito más extendido dentro del universo de OSC, y muchas organizaciones,

habitualmente orientadas hacia otras problemáticas, jerarquizaron esta tarea en los momentos más críticos de la pandemia. Esta tarea se desarrolla, en buena medida, en articulación con organismos estatales, de los tres niveles, y en el marco de redes de articulación más amplias.

I. Introducción

Este informe analiza las acciones de las organizaciones sociales del campo de la asistencia alimentaria y sus vinculaciones con el Estado, así como la conformación de redes dentro de este campo, a partir de los datos generados por Territorios en Acción entre 2020 y 2021 durante la pandemia del Covid19. Para esto, en un primer momento presentamos un recorrido sintético sobre las principales políticas de asistencia alimentaria desde la década de los '80 a esta parte, para luego en un segundo momento, caracterizar las respuestas y acciones de las organizaciones vinculadas a este campo de acción. Finalmente a modo de conclusión, realizamos algunas reflexiones generales sobre el rol de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en este campo de acción y sus desafíos.

II. El papel de las organizaciones sociales de base territorial en la seguridad alimentaria

Durante la pandemia del COVID-19 las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un rol central en la contención de aquellos sectores donde las medidas de aislamiento social impactaron de manera negativa sobre las posibilidades de obtener ingresos, dada las condiciones de precariedad laboral previa a la pandemia, lo que redujo significativamente la capacidad de las personas para acceder a alimentos (Gradin, Rofman y Rosa, 2021). Sin embargo, este rol de las organizaciones no se inicia con la pandemia, sino que tiene como antecedentes las acciones de la sociedad civil para contener los efectos de las crisis económicas que afectan nuestro país de forma sistemática desde el regreso a la democracia en la década de los 80', y que tuvieron en la crisis del 2001 y 2002 un punto de inflexión respecto de las intervenciones estatales alimentarias. Durante este periodo el Estado Nacional desplegó diferentes dispositivos, basados en diferentes paradigmas sobre el acceso a los alimentos, que han tenido como objetivo garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía, algunos de los cuales han implicado la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

En la década de los '80 la crisis económica se encontró con las tomas de tierras y las ollas populares en los barrios humildes de las grandes ciudades de nuestro país. La acción territorial y organizativa tuvo, como antecedente primero a las redes comunitarias durante las tomas de tierras, los reclamos por las condiciones de vida y las ollas populares acontecidas en la provincia de Buenos Aires, y también se nutrió de las experiencias del movimiento villero de la década de los '60 y '70, de los movimientos de curas tercermundistas, y de las comunidades eclesíásticas de base. Las transformaciones operadas en el mundo popular a partir de los cambios en el mundo del trabajo, dieron lugar al surgimiento del “territorio” como núcleo de la acción de contención y asistencia social, centro de reivindicaciones y posteriormente un punto de partida para la organización. En la crisis de la sociedad salarial, el territorio como espacio de pertenencia y de acceso a las políticas estatales, se convirtió en el anclaje necesario y obligatorio donde los sectores populares construyeron sus subjetividades, sus representaciones y sus organizaciones colectivas (Merklen, 2005). Siguiendo a Zibecchi (2003) podemos afirmar que el territorio es la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación. La desterritorialización productiva (a caballo de las dictaduras y las contrarreformas neoliberales) hizo entrar en crisis a los viejos movimientos, fragilizando sujetos que vieron evaporarse las territorialidades en las que habían ganado poder y sentido.

Paralelamente, la descentralización de las políticas sociales de la mano del paradigma neoliberal, y el auge del “desarrollo local” como estrategia socio productiva, se instalaron en el territorio como nueva base de acción social, en contraposición a las políticas sectoriales del modelo de Estado benefactor y del seguro social como estrategia de intervención en la sociedad. Y es en este escenario que las organizaciones de la sociedad civil adquieren un rol fundamental en el acceso al derecho a la alimentación de una parte importante de la población argentina.

Como señala Santarsiero (2013), “el surgimiento de comedores comunitarios en barrios pobres forma parte de este conjunto de acciones que fueron emergiendo como distintas intervenciones territorializadas de asistencia alimentaria

junto con la incorporación, de manera heterogénea y fluctuante, de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación y ejecución de programas y políticas sociales” (p.320). Estas iniciativas se han ido configurando como una respuesta más a la satisfacción de necesidades alimentarias en el seno de la asistencia social estatal. Las ollas populares, los comedores, las copas de leche, la distribución de mercadería, las compras comunitarias, las huertas, cocinas y otras iniciativas comunitarias de resolución del problema alimentario, constituyen un entramado espeso de organizaciones que cotidianamente, y en íntima vinculación con el Estado, accionan para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. A su vez, estos espacios de sociabilidad alimentaria (Naranjo, 2013) se constituyen también en espacios de integración y desarrollo socioeconómico, sanitario, cultural, y/o educativo, a partir de la confluencia de una diversidad de acciones y actividades generadas por la propia organización colectiva, y donde las y los vecinos encuentran una ventanilla de acceso a derechos y asistencia (Schijman y Lae, 2009; Gradin, 2018), en sus territorios.

III. Políticas públicas de asistencia alimentaria y organizaciones de la sociedad civil

La problemática del acceso a una alimentación adecuada cuenta ya con una trayectoria importante en nuestro país, y está presente en la agenda de políticas públicas desde la década del `80. La primer iniciativa de gran escala , durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) fue el Plan Alimentario Nacional (PAN), el cual distribuía cajas de alimentos entre la población considerada vulnerable o pobre, denominadas “Cajas PAN”. El diseño de este plan estuvo enmarcada en la concepción gubernamental de que el crecimiento económico era el generador del bienestar social y por lo tanto, el objetivo era asistir transitoriamente a quienes no pudieran acceder a los niveles mínimos de subsistencia hasta que el modelo de desarrollo “derramara”. Según Repetto (2001) a partir de esta década se puede hablar de dos modalidades complementarias de asistencia alimentaria, la distribución de cajas de alimentos y el establecimiento de comedores comunitarios. Las “cajas PAN” y los agentes públicos que acompañaban la implementación de la política, los “agentes PAN”, fueron los precursores de una modalidad de intervención estatal, a la vez masiva y

focalizada, de atención a la cuestión de la pobreza. A su vez, es el primer antecedente de territorialización de la asistencia social, dada su forma de implementación a través de estructuras estatales locales, muchas veces estrechamente vinculadas a las organizaciones sociales y políticas de base territorial, que fue replicada por muchos otros programas de “combate de la pobreza”.

Más adelante, con la crisis económica de 1989, se multiplicaron las ollas populares y los comedores comunitarios (Vinocur y Halperin, 2004), y el núcleo de las políticas alimentarias del Estado se sustentó en los programas de entrega de alimentos. Es decir, según diferentes autores (Lava, 2014; Arcidiácono, 2012) la década de 1990 se caracterizó por la focalización y la descentralización de la gestión de las políticas alimentarias, generándose una estructura de distribución de las prestaciones alimentarias a través de unidades ejecutoras territoriales. Ejemplo de esto son el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el programa de Apoyo Solidario a los Mayores (ASOMA), el Programa Promoción del Bienestar de los Mayores (PPB), el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR), el Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI), y el programa Unidos.

Un ejemplo paradigmático es el Plan Vida en la Provincia de Buenos Aires, cuya característica distintiva fue su dimensión organizacional y comunitaria para encarar la asistencia alimentaria. El trabajo en red se basó en la conformación de espacios de articulación, donde había una Trabajadora Vecinal (Manzanera) a cargo de la distribución diaria de los módulos alimentarios correspondiente a cada grupo familiar, de llevar adelante el registro de la información sobre la situación nutricional, la asistencia a los controles y a las capacitaciones. Estas trabajadoras conformaron una red consolidada de organización por donde se canalizaron los recursos del plan y desde donde se construyó la relación entre el Estado y las beneficiarias; a la vez que se institucionalizaron como un actor fundamental en el desarrollo de las políticas sociales de la provincia (Gradin 2018). Este programa se constituyó en un antecedente sustantivo de la participación de la sociedad civil en las políticas alimentarias.

También durante la década de los 90, se lanzó el Bono Nacional Solidario de Emergencia, más conocido como “Bono Solidario”, destinado a contribuir a la atención de las necesidades alimentarias y mínimas del sector más postergado de la población. El Bono Solidario preveía tres etapas: asistencia alimentaria a un millón de familias y grupos, autoabastecimiento familiar y microemprendimientos productivos. Según Abeya Gilardon (2016) solo se alcanzó la primera etapa, sumida en denuncias y acusaciones de corrupción desde la bancada opositora de la Cámara de Diputados. El decreto de creación del Bono Solidario fue complementado con la Ley 23740 Programa de Emergencia Social, que creaba una contribución solidaria para su financiamiento con aportes importantes desde el sector privado. Esta inédita iniciativa no prosperó en la medida esperada y el Bono Solidario fracasó por las denuncias de distribución discrecional y las dificultades políticas y operativas de la asistencia social.

En el año 1997 se crea el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR), dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, y financiado por el Banco Mundial. El objetivo era constituir un instrumento ágil y transparente en el manejo de los fondos para proyectos originados por demandas de comunidades vulnerables. El programa puso especial énfasis en la participación comunitaria a lo largo de todo el ciclo de un proyecto, propiciando mediante la participación directa de los beneficiarios, abarcando la autogestión y el control directo de los fondos por parte de los mismos. El programa estuvo destinado principalmente a comedores comunitarios, permitiendo financiar desde utensilios de cocina, reformas edilicias hasta alimentos (Gradin, 2018).

Un ejemplo similar de financiamiento de iniciativas comunitarias en materia alimentaria por parte del Estado, fue durante la crisis del 2001, en el marco de la implementación en el gobierno de Eduardo Duhalde, con el financiamiento del Banco Mundial, del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Este Plan otorgaba un ingreso incorporando la posibilidad de realizar una contraprestación laboral en proyectos comunitarios, impulsados principalmente por las organizaciones sociales, donde abundaban los comedores comunitarios.

En este recorrido de los principales programas alimentarios, podemos identificar que en la década de los 90 predominó un conjunto de políticas focalizadas y descentralizadas en el marco del paradigma neoliberal de gestión pública. Para limitar la conflictividad social, los programas sociales y, particularmente, los alimentarios se pensaron como políticas compensatorias y asistencialistas focalizadas en la población en situación de pobreza estructural y/o funcional (Abeya Gilardon, 2016). Y en todas esas políticas, las organizaciones de la sociedad civil fueron actores centrales al garantizar la implementación territorial de las mismas.

En el año 2002, dado el contexto de crisis económica y social y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable, se decreta el estado de emergencia alimentaria y se crea el Programa de Emergencia Alimentaria en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Decreto 108/2002). Su prioridad fue la compra de alimentos para atender las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de sobrevivencia.

A través de la Ley 25.724 del año 2003 y como producto de la campaña “El hambre más urgente” impulsada por una serie de organizaciones de la sociedad civil, se estableció la unificación y coordinación de todos los programas alimentarios con financiamiento nacional vigentes, en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (Arcidiácono, 2012).

Este programa ha estado vigente hasta la actualidad y tiene como objetivo “posibilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad social a una alimentación complementaria, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país”. Este Plan se organiza en varios componentes, como la tarjeta Alimentar de asignación monetaria para la compra de alimentos, la cobertura a los comedores escolares, a la vez que mantiene activa una línea de apoyo a los comedores comunitarios a través de la línea “Abordaje comunitario”, que en el año 2020 financió a 1161 asociaciones de base. (Siempro, 2020). Estos últimos datos ponen en evidencia que durante la pandemia de Covid19, las políticas para garantizar el acceso a la alimentación

han sido una de las claves en la cobertura social de los sectores populares, que vieron reducidos drásticamente sus ingresos con las restricciones del confinamiento.

En este marco general, debemos señalar que la implementación del Plan Argentina contra el Hambre, como las políticas anteriores, involucran acciones de diversos organismos y niveles del Estado, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones religiosas, etcétera. Efectivamente las organizaciones sociales han sido un actor estratégico en el despliegue de las políticas alimentarias en los territorios, ya sea en su carácter asistencial como en la promoción de la seguridad alimentaria.

Sobre las características de la participación social en los procesos de implementación de las políticas en el territorio en el contexto de la crisis socioeconómica de la pandemia del COVID-19 nos vamos a centrar en el próximo apartado, a través del análisis de las organizaciones sociales mapeadas por Territorios en Acción durante el 2020 y el 2021.

IV- Los resultados: organizaciones sociales en el campo de la seguridad alimentaria

En esta sección presentamos los resultados del relevamiento colaborativo realizado por Territorios en Acción TeA), durante los años 2020, 2021 y parte del 2022. El mapeo de organizaciones sociales y sus iniciativas frente a la pandemia desarrollado en este período se basó en un cuestionario autoadministrado que indagaba sobre el campo de acción habitual de las organizaciones, y sobre las actividades o iniciativas que generaron frente a la situación de crisis pandémica. Las respuestas se registran en el mapa interactivo y en la base de datos publicada en el sitio web.

Este documento focaliza en el segmento de organizaciones que se dedica a la cuestión de la seguridad alimentaria. Para construir este universo, tomamos en cuenta varias preguntas del cuestionario: por un lado incluimos a las entidades que, en la pregunta referida explícitamente al campo de acción, respondían “asistencia alimentaria”, y también a aquellas organizaciones que tanto en la descripción detallada de sus acciones o de sus iniciativas frente a la pandemia, decían realizar actividades vinculadas al derecho a la alimentación.

Del total de las 1516 organizaciones sociales mapeadas por TeA en este período, identificamos 726 vinculadas al campo de la seguridad alimentaria. Ello pone de manifiesto la centralidad de esta tarea en el mundo de la sociedad civil organizada, ya que casi la mitad de las organizaciones registradas (48%) afirman desarrollar actividades vinculadas al acceso a la alimentación en nuestro país.

Este universo de 726 organizaciones desplegó durante los años de la pandemia un total de 955 iniciativas diferentes vinculadas con la seguridad alimentaria. La diferencia entre la cantidad de organizaciones mapeadas y el número de iniciativas se explica porque muchas OSC desplegaron más de una iniciativa dentro de un mismo campo de acción.

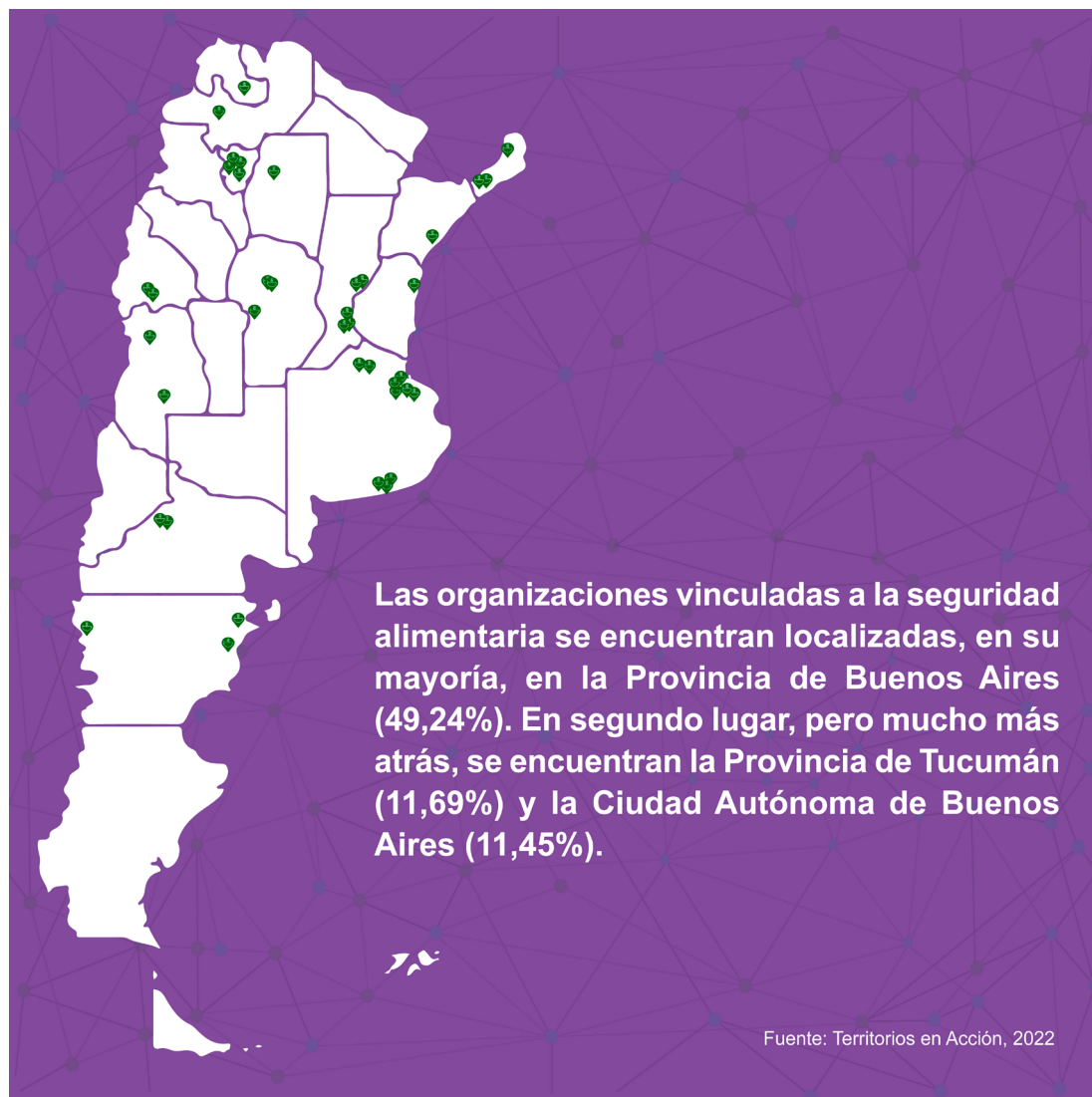
En los apartados siguientes analizaremos el accionar de este segmento de organizaciones , poniendo la mirada en su actividad habitual, en las iniciativas específicas que fueron desplegadas durante la pandemia del Covid19 y en las tramas de relaciones que se generaron en este marco, en nuestro país.

A. Distribución territorial

Las organizaciones vinculadas a la seguridad alimentaria se encuentran localizadas, en su mayoría, en la Provincia de Buenos Aires (49,24%). En segundo lugar, pero mucho más atrás, se encuentran la Provincia de Tucumán (11,69%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,45%). Claramente existe una correlación entre el nivel de concentración de población en estos centros urbanos y variables sociodemográficas como nivel de pobreza, indigencia y desempleo¹, que evidencian la dificultad que enfrenta la población de estos territorios para garantizar el acceso a la alimentación sana de manera constante.

1. En el caso de los niveles de desocupación, podemos señalar que para el 4to trimestre de 2021 se estimaban en 8,2% en Gran Bs As, 8,6% en Gran Tucumán, y 4,6% en CABA según datos del INDEC.

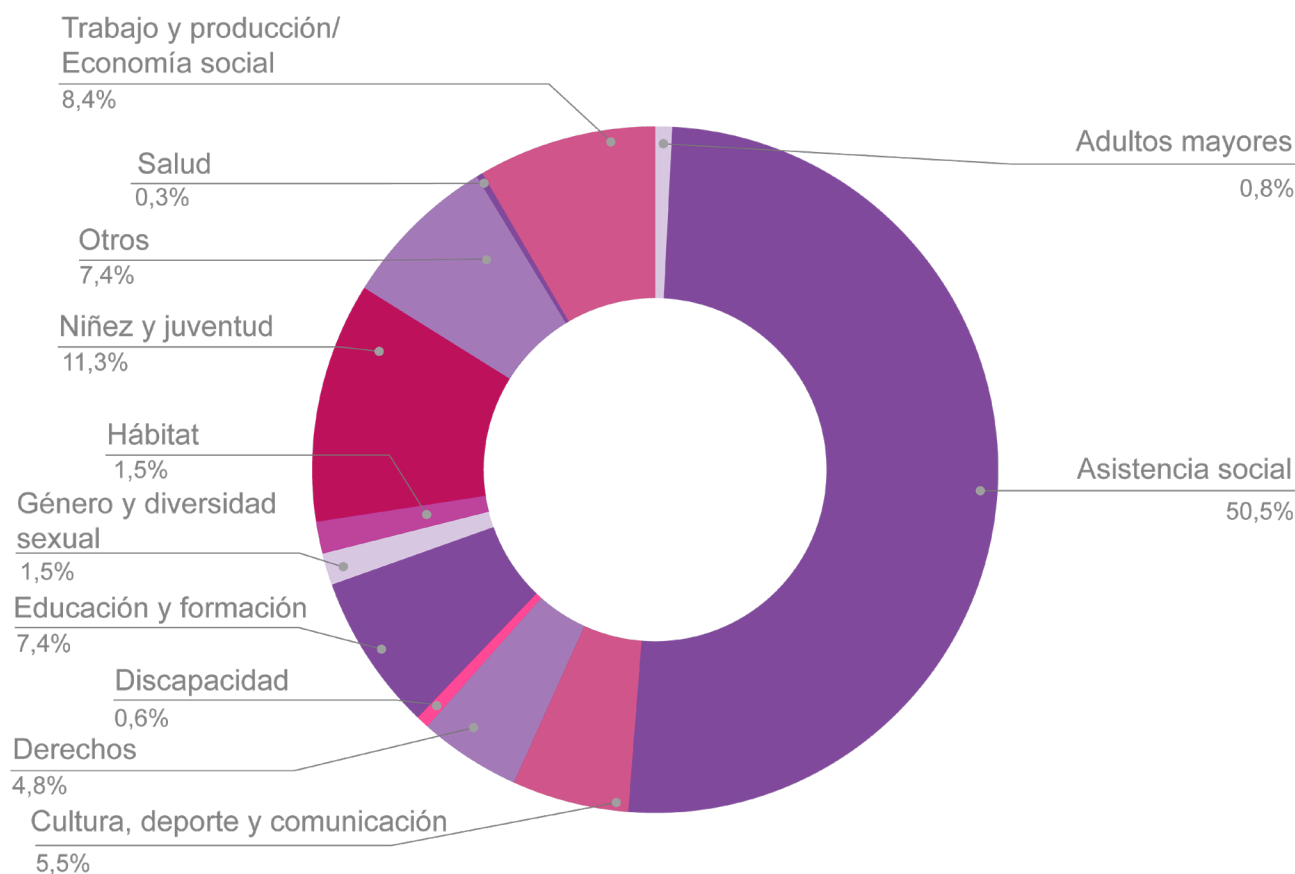
Imagen 1. Organizaciones sociales vinculadas a la seguridad alimentaria.



B. La acción habitual de las organizaciones dedicadas a la seguridad alimentaria.

Dentro del conjunto de organizaciones que desarrollan acciones de prestación de servicios alimentarios, la mayoría define como su campo habitual de acción a la asistencia social, en general.

Gráfico 1. Campo de acción habitual de las OSC sobre seguridad alimentaria.



Fuente: Territorios en Acción, 2022

Pero por otro lado, se evidencia que muchas organizaciones habitualmente dedicadas a otros objetivos, también se involucran en la asistencia alimentaria, lo que se verifica dentro del universo de entidades que brindan algún servicio nutricional, el 11,3% son entidades dedicadas a Niñez y Adolescencia, el 8,4% se ocupan de Trabajo y Producción / economía social y el 7,4% hacen Educación y Formación. Y si bien los porcentajes de otras categorías de organizaciones son menores, los datos evidencian que el acceso a la alimentación es un tema muy relevante en la agenda de las organizaciones.

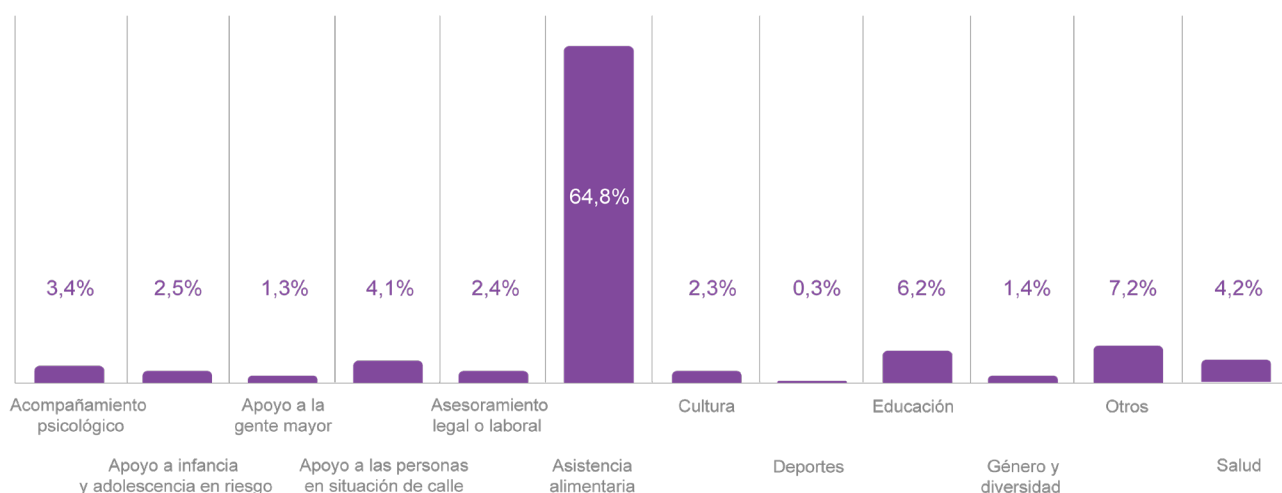
En síntesis, estos datos ponen en evidencia que la prestación alimentaria constituye una actividad presente en una variedad muy amplia de organizaciones, aún si esa tarea no se presenta como constituye su objetivo principal. En el difícil panorama socioeconómico que enfrenta la población de origen popular, la necesidad alimentaria resulta una demanda de vital importancia.

C. Iniciativas frente a la pandemia

Durante la pandemia del Covid19 las organizaciones vinculadas al campo de acción alimentario, desarrollaron diferentes iniciativas, vinculadas principalmente a la asistencia directa en la distribución de alimentación. Casi un 65% de las organizaciones llevaron adelante ollas populares, merenderos, comedores comunitarios, reparto de alimentos, etc, dando cuenta de la situación vulnerable de las mayorías populares en relación a su acceso al derecho a la alimentación en el marco de la crisis económica y social generada por la pandemia, a pesar de las políticas de distribución de ingresos que se pusieron en marcha en el año 2020.

La importancia que asumió la cuestión del acceso a necesidades básicas, como la alimentaria, en la emergencia de la pandemia, queda en evidencia en el gráfico siguiente. Si bien estas organizaciones desarrollaron otras iniciativas en los territorios, entre las que se destacan aquellas vinculadas al apoyo a personas en situación de calle, a cuestiones de salud, al acompañamiento psicológico a la población en general, al apoyo a las infancias y adolescencias en riesgo, al apoyo a adultxs mayores, entre otros., su incidencia fue mucho menor que la tarea asistencia alimentaria.

Gráfico 2. Ámbito temático de las iniciativas de las organizaciones vinculadas a la seguridad alimentaria.

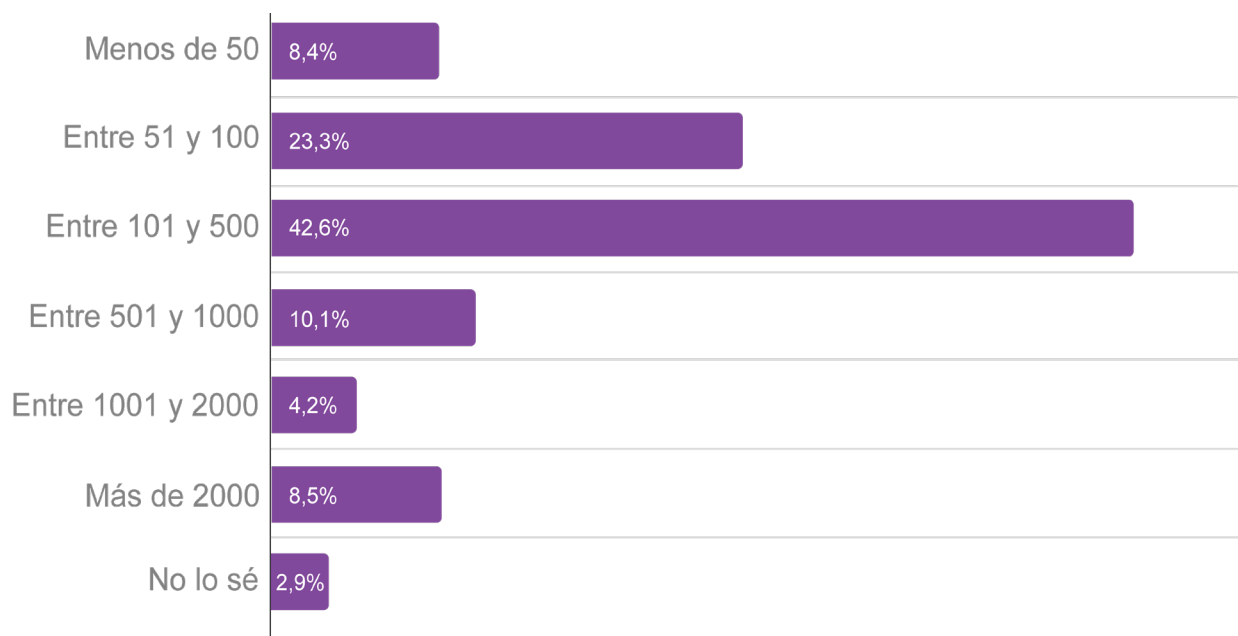


Fuente: Territorios en Acción, 2022

Alcance y cobertura de las iniciativas en pandemia

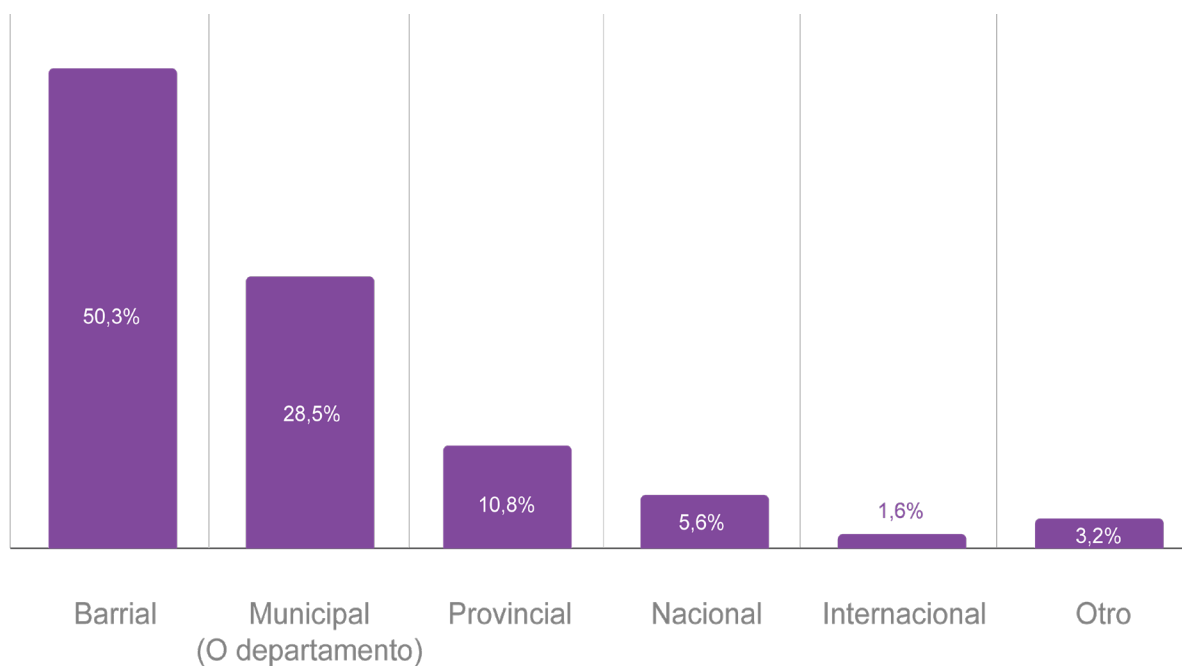
Como se puede observar en los Gráficos 3 y 4 , casi el 75% de las organizaciones dedicadas al campo de la alimentación tiene un alcance de hasta 500 personas aproximadamente, y un 79% tiene una cobertura barrial y/o municipal. Es decir, la gran mayoría de organizaciones asistenciales tienen una escala pequeña, tanto en lo relativo a su cobertura poblacional como en cuanto al alcance territorial.

Gráfico 3. Alcance de la iniciativa de las OSC de la seguridad alimentaria.



Fuente: Territorios en Acción, 2022

Gráfico 4. Cobertura territorial de las iniciativas.



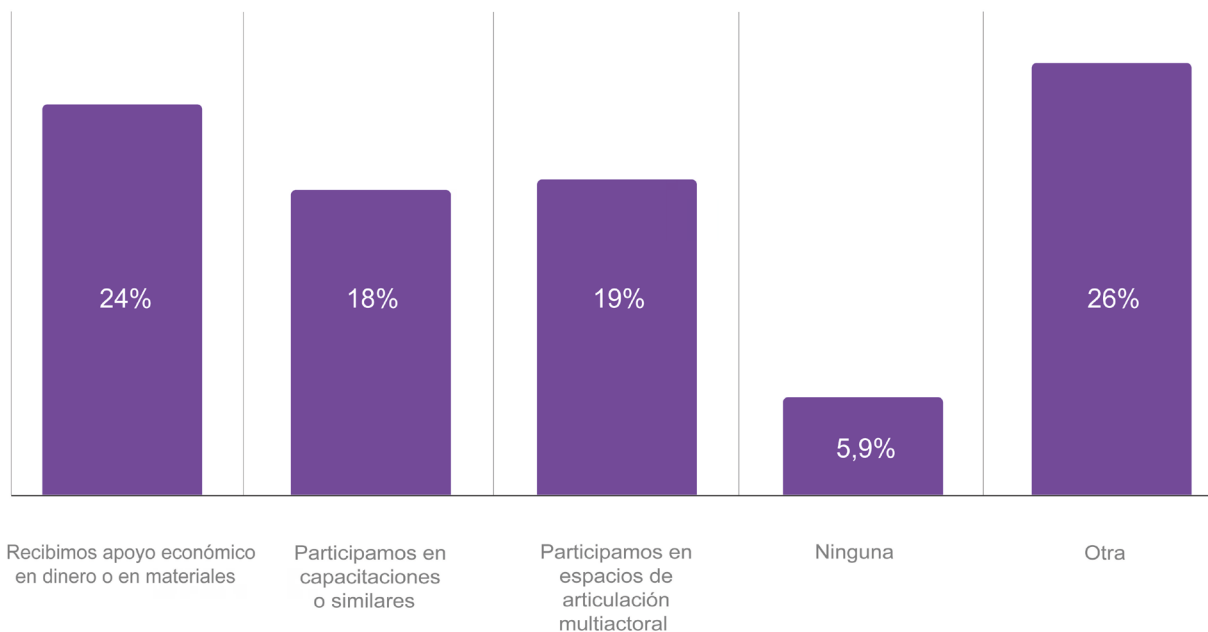
Fuente: Territorios en Acción, 2022

Relación con el Estado

Estas preguntas apuntaban a caracterizar qué relación se habían establecido entre las organizaciones y el Estado, en sus tres niveles, en el marco del desarrollo de las iniciativas antes mencionadas. Resulta destacable señalar que solo un 5% de las organizaciones mapeadas responde que no tiene relación con el Estado. Ello evidencia que la intervención en seguridad alimentaria se apoya en una fuerte articulación entre organismos estatales y espacios asociativos, lo que a su vez se relaciona claramente con el formato participativo predominante en las políticas alimentarias, tal como fue descrito previamente.

Esta relación abarca varias modalidades, ya que el 24% recibe apoyo económico del Estado; un 18% participa de capacitaciones y/o talleres ofrecidas por organismos gubernamentales, y un 19% participa de espacios de articulación multiactoral como Foros, mesas de trabajo, consejos consultivos, etc., además de un porcentaje importante de casos en que mencionan otra forma de articulación. Cabe señalar que otro grupo de organizaciones no respondió a la pregunta, lo que explica el porcentaje restante. Esto se puede observar en el Gráfico a continuación.

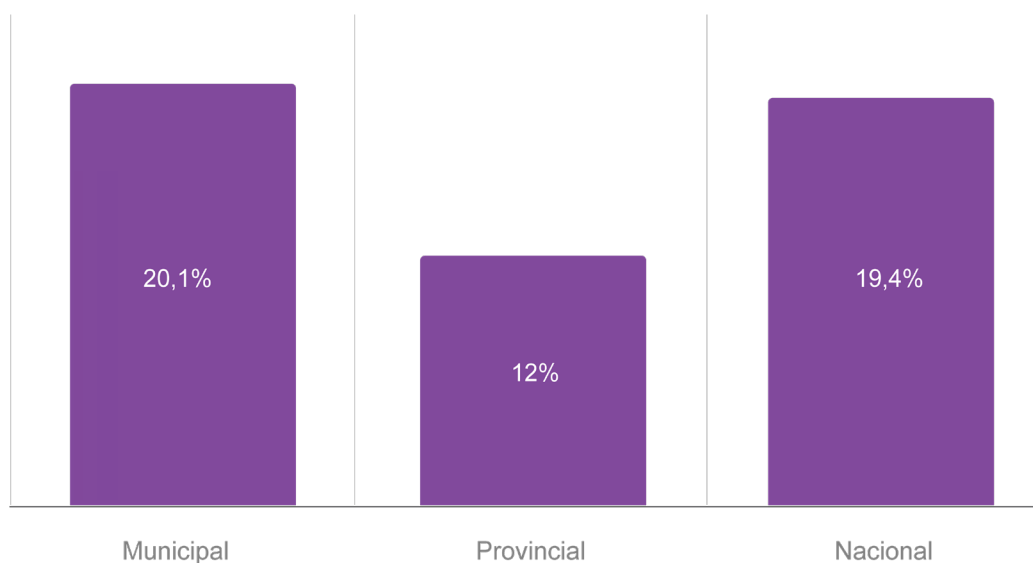
Gráfico 5. Relación con el Estado.



Fuente: Territorios en Acción, 2022

Respecto a con qué jurisdicción del Estado mantienen mayores vínculos, como se puede ver en el Gráfico siguiente, las respuestas están bien distribuidas: el 20,1% señala al Estado Nacional, y el 19,4% al nivel local, mientras que el Estado provincial sólo está presente en el 12% de los casos. El porcentaje restante no respondió la pregunta.

Gráfico 6. Nivel jurisdiccional de la relación.

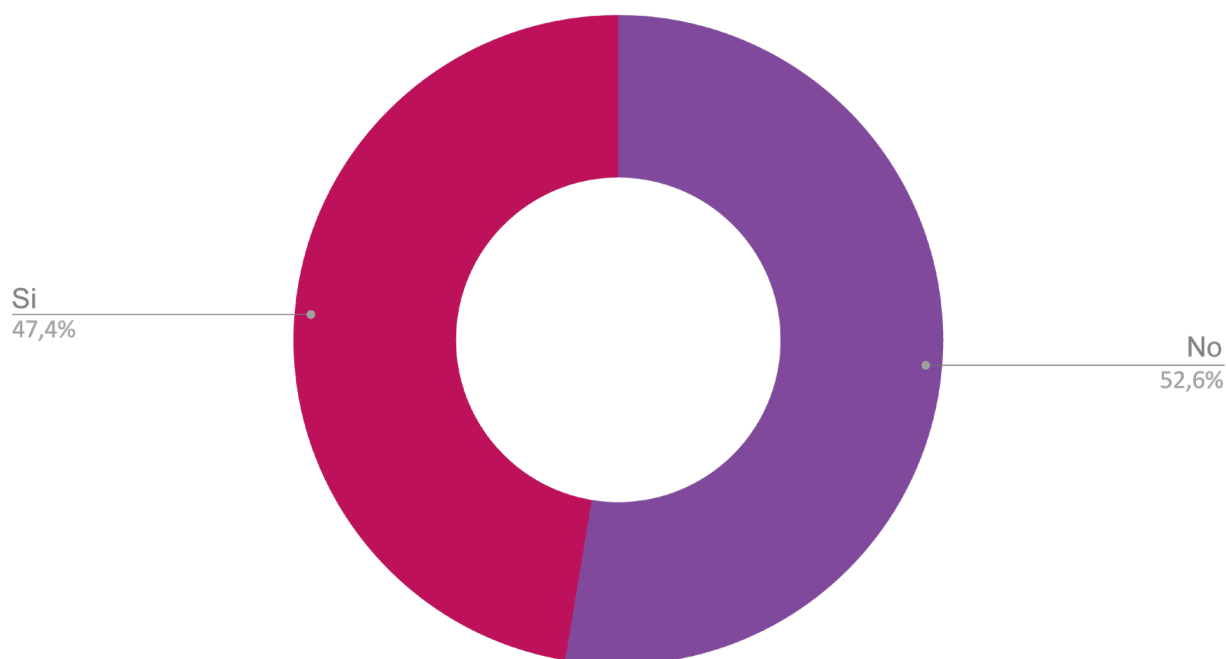


Fuente: Territorios en Acción, 2022

D. Participación en redes

Otro aspecto a analizar es el relativo a la participación de las organizaciones en tramas asociativas o redes más amplias, pregunta que apunta a caracterizar la densidad del tejido asociativo en este campo. Como se advierte en el Gráfico siguiente, el 47,4% se encuentra articulado en redes de organizaciones que trabajan diferentes temáticas, principalmente vinculadas a las cuestiones de acceso a la alimentación. Este dato muestra la fortaleza del entramado organizacional construido alrededor de esta problemática.

Gráfico 7. Participación de las organizaciones en redes.



Fuente: Territorios en Acción, 2022

V. A modo de conclusión

Podría afirmarse que el campo de la seguridad alimentaria constituye uno de los ámbitos de intervención de las organizaciones de la sociedad civil más importante en nuestro país. Particularmente en el segmento de organizaciones sociales de base territorial, las que surgen de manera autogestionada en barrios populares, la tarea de proveer alimentos está siempre en la agenda, y se potencia en momentos de crisis.

Estos resultados confirman esta hipótesis, ya que este campo se presenta como el más importante en el universo de acciones de los espacios asociativos, a la vez que gana presencia en situaciones de emergencia social, como fue la pandemia de Covid19. Se trata, además, de una tarea fuertemente articulada con las políticas públicas, lo que se puede advertir tanto en la reseña sintética de los programas estatales de las últimas décadas, presentado al inicio de este documento, como también en la información brindada por las propias organizaciones.

Al día de hoy, parecería que la tarea de provisión de alimentos continúa siendo considerada una responsabilidad ineludible de las organizaciones de la sociedad civil, y podría estimarse que la articulación con políticas sociales de gestión participativa tiende a consolidarse y extenderse. Mirando hacia el futuro, se abren otros ejes posibles de desarrollo para el universo de la sociedad civil, en el ámbito de la producción de alimentos – donde ya existe un grupo interesante de espacios asociativos –, como también en la preocupación por la calidad nutricional y sostenibilidad ambiental de la alimentación distribuida.

VI. Bibliografía

Abeyá Gilardon, E. O. (2016). Una evaluación crítica de los programas alimentarios en Argentina. *Salud colectiva*, 12, 589-604.

Arcidiácono, P. (2012) “La política del mientras tanto: programas sociales después de la crisis de 2001 -2002” 1ª ed. Buenos Aires, Biblos.

Gradin, Agustina; Rofman, Adriana; Rosa, Paula (2021); Organizaciones sociales en tiempos de pandemia. Aportes desde el mapeo colaborativo de Territorios en Acción; *Asuntos del Sur*; 2021; 36-56 <https://colabora.lat/documento/experiencias-territorios-en-accion/>

Gradin, A. (2018) Estado, territorio y participación política. Los estilos de gestión del Movimiento Barrios de Pie (2003-2009). Buenos Aires: Teseo. Disponible en: <https://www.teseopress.com/participacionpoliticadelasorganizacionesdedesocupados>

Lava, M P (2014). “Un recorrido posible por las políticas alimentarias. El caso de los programas y planes nacionales argentinos desde la década del ochenta hasta la actualidad”. En Sena, Angélica (Comp.) Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales, Buenos Aires: Estudios Sociológicos Editora, 2014: 73 – 89.

Naranjo, A. (2013). Nuevos Espacios de Sociabilidad Alimentaria: “La gente cree que es una cuestión de moda, yo siento que tengo la libertad de elegir”. [Tesis de Maestría, FLACSO-Argentina: Buenos Aires, Argentina].

Merklen, D. (2005). Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática. Buenos Aires, Gorla.

Repetto, F. (2001). Gestión pública y desarrollo social en los noventa: Las trayectorias de Argentina y Chile. Buenos Aires, Ed. Prometeo.

Santarsiero, L. H. (2013). Los comedores comunitarios como fenómeno social, político y alimentario en la Argentina de los últimos treinta años: Una “guía práctica” para su comprensión. Cuestiones de Sociología (9), 319-323. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5898/

Schijman, E., & Laé, J. F. (2011). Las rondas de las mujeres por las ventanillas del Estado. Etnografía de un trabajo invisible. Trabajo y sociedad, 15(16), 67-83.

Siempro. (2020). Reporte de monitoreo. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Buenos Aires: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Vinocur, P., & Halperin, L. (2004). Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años noventa (Vol. 85). United Nations Publications.

Zibechi, R. (2003) “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos” en Revista OSAL N ° 9, Enero 2003, Buenos Aires

Territorios en Acción

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Territorios en Acción es una iniciativa que se propone construir información para visibilizar el inmenso trabajo que las organizaciones sociales desarrollan cotidianamente en los diferentes territorios de nuestro país. En un contexto de escasa información completa y actualizada que registre y reúna estas acciones y que haga pública la riqueza de esta actividad, Territorios en Acción surge con el fin de aportar conocimiento sobre el importante papel que desempeñan las organizaciones sociales para el desarrollo social.

El proyecto surge como una iniciativa conjunta entre tres instituciones académicas de larga trayectoria en el campo de la investigación social: el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, FLACSO-Argentina y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET. El lanzamiento y la continuidad del proyecto ha sido facilitado por algunas instituciones públicas. A nivel internacional, los datos relevados contribuyen a alimentar con información argentina la plataforma global SOLIVID de acciones solidarias ante la pandemia.

En su origen, la iniciativa Territorios en Acción tenía como meta la construcción de un mapa interactivo que haga visibles las acciones que desarrollaron los espacios asociativos durante la crisis social y sanitaria generada por el Covid19, y más adelante hemos actualizado dicho objetivo, a fin de registrar el trabajo / labor/ accionar que la sociedad civil organizada lleva adelante en esta etapa de recuperación socioeconómica. La elaboración del mapa se apoya en una metodología colaborativa, sustentada en el principio de que la generación de conocimiento se realiza a partir del involucramiento y participación de los actores sociales, en este caso, las organizaciones sociales. Para ello, desde la iniciativa se convoca a organizaciones de base, redes, instituciones públicas, universidades, etc., a contribuir en la elaboración colectiva de este mapa con el fin de reflejar y valorizar el universo de iniciativas sociales impulsadas a nivel nacional.

La construcción colaborativa del mapa interactivo se basa en la respuesta por parte de las organizaciones sociales de un breve cuestionario web, la participación es libre y voluntaria. La información producida se encuentra permanente en proceso de actualización por la propia recepción y circulación de la encuesta. La información relevada es referenciada en un mapa publicado en el sitio web de la iniciativa junto a la base de datos que es de acceso abierto y público para que pueda ser utilizada por diferentes públicos en función de sus finalidades.

La distribución territorial de las organizaciones mapeadas cubre casi todas las provincias del país. En el mapa se visualiza la localización de cada organización, identificada con un ícono, junto con información básica y de contacto, para facilitar su registro y la gestación de posibles articulaciones. Es en la base de datos donde se publican íntegramente las respuestas recibidas, es decir, información general de la organización y de las iniciativas desarrolladas frente a la pandemia. Esta se encuentra en formato Excel de manera que sea accesible y descargable para asegurar su operatividad. En la página web del proyecto se puede acceder a informes -cuantitativos y cualitativos-, datos con información proveniente de la base de datos y a otro tipo de publicaciones y novedades de la iniciativa.

El proyecto tiene como objetivo transversal la construcción colaborativa y participativa de información y conocimiento a nivel nacional, por lo que la generación de redes resulta sumamente relevante. Con este objetivo como guía desde el inicio del proyecto, se ha conformado una red de instituciones de apoyo, tanto nacionales como internacionales (<https://territoriosenacción.org/acerca/>). De este modo, de Territorios en Acción forman parte más de treinta instituciones tanto académicas como también organismos públicos y privados, redes y colectivos que apoyan el proyecto y ayudan a difundir la iniciativa en todo el país para incorporar nuevas organizaciones y contribuir a su difusión.



ISBN 978-950-9379-98-5



9 789509 379985